

Jurisprudencia
EXPEDIENTE N° 98-0095-DP
VOTO N° 115-98 –30-11-98

Sentencia N° 055-98, Tribunal Aduanero Nacional, San José, a las once horas con cinco minutos del día treinta de noviembre de mil novecientos noventa y ocho.

Conoce el Tribunal del recurso de apelación y gestión de nulidad presentado por la señora Olga Martha Chinchilla Zúñiga, cédula de identidad 1-553-577, en su condición de hija y hereda universal de la sucesión de quien en vida se llamó Pablo chinchilla Castro, **contra la resolución N° RES-AL-0414-97** de las ocho horas con treinta minutos del día veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y siete, dictada por la Dirección General de Aduanas.

RESULTANDO

I.- La recurrente fundamenta sus recursos y pretensiones en:

1. Que su padre en la condición de agente aduanero de la sociedad Aduaneros Pablo Chinchilla S.A. y en forma personal fue acusado, juzgado y condenado por parte de la Administración Pública, sin habersele brindado la oportunidad del debido proceso que señala la Constitución Política.
2. Que existe en el expediente administrativo informe N° A-17-80 firmado por el señor Humberto Segura Román, en donde se expresa que la Aduana de Limón no había numerado en firme esta aceptación a la fecha en que interviene, con lo que a su criterio que demostrado el desorden existente en la Aduana, y que la única verdad es lo infundado de las denuncias. Dentro de las supuestas anomalías se dijo que la empresa Frutita S.A., había importado por la Aduana de Limón 64 furgones con frutas congeladas, que el desalmacenaje lo había realizado la agencia de cita. Asimismo se dijo que este

desalmacenaje correspondía a 60 pólizas de las que se cancelaron 45 quedando supuestamente un faltante de 15 pólizas. Se dijo que la mercancía había sido entregada por JAPDEVA sin haber cumplido con los trámites requeridos por el ordenamiento jurídico. Circunstancia que califica como ilógica, ya que, a quien correspondía la entrega y verificación era a la Aduana y JAPDEVA.

3. La Agencia Aduaneros Pablo Chinchilla S.A. y su padre como agente eran acusados, porqué razón nunca se les notificó ni llamó a declarar ni la Administración Pública ni los Tribunales de Justicia, deduzco que al no tener la Aduana prueba para incriminar a su padre, montaron toda una campaña de desprestigio hacia la agencia, logrando con ello que los clientes se fueran en busca de otras agencias, y por ende que Aduaneros Pablo Chinchilla S.A. no tuviese el dinero suficiente para caucionar, lo que aprovechó la Administración para utilizar medios “legales” y desaparecer la agencia.
4. No es posible que la agencia mantuviera un saldo en rojo durante el lapso de desalmacenaje de la empresa Frutica S.A., si existían los recibos cancelados en el Banco Áglo de Limón a fines de diciembre de 1979, ¿ entonces para qué eran ?.
5. El hecho de que los documentos originales de las Pólizas no se encontraban en la Aduana de Limón, no era responsabilidad de su padre ya que él era Agente de Aduanas, no funcionario de la Aduana de Limón, por lo tanto no tenía acceso a los documentos internos de la Aduana.
6. Que ningún funcionario de la Dirección General de Aduanas, de la Aduana de Limón o incluso del Organismo de Investigación Judicial, jamás presentaron a la agencia a realizar investigación alguna, ya que se supone que al realizar una investigación sobre todo de una acusación tan grave como ésta, lo lógico era que se indagara al acusado.
7. Argumenta que su padre nunca fue notificado, ni por los Tribunales de Justicia ni por la Administración Pública, por lo que el daño causado es enorme. En este sentido señala lo que al respecto dijo el TRIBUNAL SUPERIOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA en RESOLUCIÓN

8908 de las 15 horas del 21 de octubre de 1986: “Este Tribunal ha sostenido... que para que opere la caducidad es necesario que esté entablada la relación procesal...”

8. Que a la fecha a pesar de que han transcurrido dieciséis años no es procedente alegar la caducidad, por cuanto como lo he manifestado repetidamente, a su padre, que era el imputado nunca se le notificó. En ese sentido, señala que el TRIBUNAL SUPERIOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA en RESOLUCIÓN 9660 de las 10 horas con 15 minutos del 02 de setiembre de 1987, manifestó: “No procede declarar la caducidad de un juicio en el que no se ha trabado la relación procesal. En repetidas ocasiones esta sección ha mantenido el criterio que el presupuesto procesal para que ocurra la terminación del proceso por la caducidad de la instancia. Es que la resolución que le dio curso a la acción haya sido notificada a todos los codemandados. Momento en que ocurre emplazamiento y surge el vínculo procesal.” Igual criterio emitió el TRIBUNAL SUPERIOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA en RESOLUCIÓN 9659 de las 10 horas del 02 de setiembre de 1987: “Para que el proceso se pueda declarar caduco, debe antes existir y ello se opera al tratarse de la litis, con la notificación de los demandados; lo cual es independiente del problema de si debe estar deducida o interpuesta la demanda”.
9. Que los Tribunales de Justicia desestimaron la denuncia incoada contra su padre y la agencia, por ello argumenta que son inocentes, sin embargo en una actitud de total desobediencia a lo resuelto por los Tribunales, el Estado de una manera disfrazada siempre logró su objetivo, o sea ver a la Agencia cerrada. Nótese la persecución desmedida, implacable y cruel contra Aduaneros Pablo Chinchilla S.A. por parte de los funcionarios de la Aduana de Limón, que sin existir un fallo condenatorio en contra de la agencia, por parte de los Tribunales de Justicia –UNICOS FACULTADOS CONSTITUCIONALMENTE PARA JUZGAR Y CONDENAR- tomaron la justicia por sus manos condenando Aduaneros Pablo Chinchilla S.A. a la suspensión

de todo trámite en dicha Aduana bajo el pretexto de no haber cancelado una suma de dinero, que como lo ha manifestado, ¿ porqué razón no se tomó de la caución? –si precisamente creo que para eso es- y ni siquiera se notificó a su padre que existía una cuenta pendiente.

10. Que en el expediente que existe en poder del Departamento Legal de la Dirección General de Aduanas consta nota certificada por el Contador de la Aduana de Limón en donde se señala un saldo positivo a favor de Aduaneros Pablo Chinchilla S.A. por la suma de C.1.736.895,09. ¿ Dónde está ese dinero?.
11. Muestra de que se violó el debido proceso es el Memorandum 005 de la Aduana de Limón donde no se permite el trámite de documentos y presentación por parte de la agencia y de la que se puso en conocimiento al entonces Director General de Aduanas, señor Luis Campbell, como un castigo a la supuesta diferencia de dinero a la que se atribuían las defraudaciones, pero debe quedar claro el hecho de que únicamente se recibió copia del mencionado memorandum. Deduce ahora que la suma citada es por el supuesto dinero que se debía de las pólizas, pero en ningún momento se notificó a su padre para que pudiese defenderse.
12. Con dicha acusación se desprestigió la agencia, lo que ocasionó la pérdida de confianza, tanto a nivel de clientes como del Sistema Bancario Nacional, aunque si bien es cierto nunca se pudo demostrar que Aduaneros Pablo Chinchilla S.A. había cometido los delitos de Contrabando y Defraudación al Fisco.
13. Con el cierre de la agencia en Limón sin que su padre tuviese conocimiento de los verdaderos motivos, hizo que su estado de salud se viese sumamente afectado, hasta causarle la muerte, ya que como es lógico en cualquier persona decente, la incertidumbre, que se creó alrededor de la agencia fue enorme, y al verse totalmente atropellado por el sistema administrativo, que sin darle motivos de un momento a otro le cierra su negocio, el daño provocado es irreparable por cuanto su padre ya no está.

- 14.Desde que se inició la persecución en contra de Aduaneros Pablo Chinchilla S.A. tanto su padre, como la familia e incluso empleados fueron objeto de burla y comentarios malintencionados, provocando como lo repite, el cierre prematuro de la misma.
- 15.Al no poder la administración demostrar que la agencia era responsable de los delitos de contrabando y defraudación al Fisco, usó el camino más corto y seguro para ellos, pero más infame para su padre fue acusar a la agencia de no tener garantía para caucionar, hecho totalmente cierto, pues como lo ha manifestado ya en múltiples ocasiones, era prácticamente imposible poder caucionar ya que la Agencia había perdido su buen nombre, su credibilidad y por lo tanto su clientela.
- 16.Otro hecho importante lo es que al presentar la acusación contra Aduaneros Pablo Chinchilla S.A.y al iniciarse la investigación, como consta en varios informes en el expediente administrativo resultaron involucrados tanto los funcionarios de la Aduana de Limón como de JAPDEVA, quienes muy astutamente, decidieron dejar todo quieto, no se interesaron porque su padre que era el imputado fuese notificado, por el contrario en forma administrativa, realizaron todo el procedimiento, por supuesto sin notificar a su padre, ya que de haberlo hecho él habría contestado demostrando su inocencia y los únicos que resultarían perjudicados eran únicamente los empleados de la administración, por lo que resultó más fácil condenar a Aduaneros Pablo Chinchilla S.A. que al final hasta donde tiene conocimiento fue el único afectado con las actuaciones de la administración.
- 17.Resulta importante también señalar que de la investigación realizada y que consta en el expediente administrativo y del cual Aduaneros Pablo Chinchilla S.A. a tenía un saldo a favor, lo cual fue manipulado por la Aduana de Limón para no dañar su prestigio ni el de JAPDEVA.
- 18.En la resolución de las 11:30 del 24 de enero de 1983 del Departamento Legal del Ministerio de Hacienda, se cita a comparecencia oral y privada al representante legal de Aduaneros Pablo Chinchilla S.A. para las nueve horas

del veinticinco de febrero de mil novecientos ochenta y tres, notificación que nunca se hizo efectiva.

19. Otro hecho relevante es que la resolución N° DL-262-82 del 20-10-82 se notificó a un señor Roy Soto Murillo que había sido empleado de la agencia, pero no era empleado al momento en que ocurre la notificación, además de que no era la persona autorizada por la administración para recibir notificaciones a nombre de la agencia.
20. Que como consta en el expediente administrativo existe un saldo a favor de aduaneros por la suma de C.1.736.895,09 que a la fecha dicho saldo nunca se ha reintegrado a ninguno de los herederos de su padre, se pregunta ¿ dónde está ese dinero, porqué razón nunca se comunicó a los herederos que ese dinero existía, dónde están los intereses que esa cantidad ha devengado a lo largo de dieciséis años y porqué razón no existe al menos estado de cuenta en la Aduana de Limón?.
21. Es inimaginable cuanto dolor y sufrimiento tuvo que soportar su padre en sus últimos días de vida, quien después de ser un prestigioso empresario, al final su agencia fuese suspendida sin saber a ciencia cierta los motivos. Lo que es peor quizá muchos de sus clientes o amigos sabían que estaba acusado de graves delitos y él que era la persona más importante dentro del proceso era la que no estaba enterada para poder defenderse, de modo que murió sin tener siquiera conocimiento que había sido acusado y menos que había sido desestimada. La zosobra de esta injusta acusación arrastra aún a su familia quienes por largos años han sufrido sin saber cual fue la acusación en contra de su padre, el daño causado es irreparable.
22. El día de hoy aún existe persecución, y la intención de continuar causando un perjuicio, pues no encuentra que otro nombre darle, al hecho que en la Aduana de Limón, donde por largos años funcionó la agencia, ahora resulta que no existe documentación alguna, que en el Registro de la Dirección General de Aduanas no exista registro documental o electrónico sobre Aduaneros Pablo Chinchilla S.A. como agencia de aduanas, o sea que para dicho Departamento la Agencia nunca existió. Que solicitó desde el 04 de setiembre de 1996 los

requisitos para la reapertura y no obtuvo respuesta, por lo que se vio obligada a presentar un Recurso de Amparo. Que durante mucho tiempo en los informes sobre saldos de las agencias que emite la Aduana Central, aparece la agencia Aduaneros Pablo Chinchilla S.A. con un saldo disponible y de pronto a partir de la segunda semana de octubre de 1996 la Agencia es borrada. Pregunta ¿será acaso, que al enterarse que estoy investigando y al decir el Registro de la Dirección General de Aduanas que Aduaneros Pablo Chinchilla S.A. no existe, se van a contradecir y se va a descubrir que durante muchos años la administración ha causado perjuicio a la agencia y que aún continúa causándolo?.

23. Las pérdidas económicas que ha sufrido Aduaneros Pablo Chinchilla S.A. desde el año 1980 al haberse obligado al cierre sin motivo justificado es enorme, tómese en consideración todo el trabajo que pudo haber desarrollado en todos esos años, ya que de los libros contables de la agencia, claramente se nota cuáles eran los movimientos económicos, que la agencia era sumamente solvente a esa fecha, imaginémonos cuánto dinero ha dejado de percibir y cuánto estaría recibiendo en este momento, es claro que las pérdidas son millonarias. Por lo expuesto considera que la administración pública está en la obligación de indemnizar el daño que con su actuar irresponsable causó, por lo que pide se evalúen los daños y perjuicios causados a lo largo de dieciséis años y se indemnice.
24. Que a la fecha a pesar de que han transcurrido trece años no es procedente alegar la prescripción, por cuanto como lo ha manifestado repetidamente, a su padre que era el imputado nunca se le notificó.
25. El daño se causó de manera irremediable, manchándose el nombre y el prestigio no solamente de la agencia, que quizá con el transcurso del tiempo pueda limpiarse cambiándose el nombre, pero el daño moral, físico y económico causado al honor de su padre y la familia es irreparable.
26. Solicita se acoja en todos sus extremos el presente recurso de apelación para ante el Tribunal Aduanero Nacional contra la resolución N° RES-AL-0414-97, dictada por la Dirección General de Aduanas y se le pague lo que el Estado es

en deberle por daños y perjuicios ocasionados de lo contrario ruega se de por agotada la vía administrativa, o actuará como en derecho corresponda.

27. Con base en los hechos expuestos y pruebas de derecho queda plenamente demostrado, a su criterio, que los plazos para que la administración resolviera ya vencieron, y lo que correspondía ahora, era que el Tribunal Aduanero Nacional resolviera, no que alargue más los plazos, para admitir y resolver que de por si ya están harto vencidos, y por supuesto en su perjuicio, en este sentido cita el voto de la Sala Constitucional N° 3107-97: "... las restricciones de la Administraciónno puede ser una carga que se traslade al Administrado....". El devolver el expediente a la Dirección General de Aduanas, lo único que hace es retrasar una vez más el proceso, y que la administración me continúe causando un perjuicio económico, por lo tanto solicita se acoja su petición de aclaración y adición y se le informe porqué razón no se dio por agotada la vía administrativa.

28. Que debo hacer ahora? Ver como en un país que se precia de ser un estado de derecho, donde todos obtienen justicia pronta y cumplida, a mí, dichos principios no se me aplican.

29. La notificación de la resolución RES-AL-434-98 no cuenta con fecha ni hora de entrega. El contenido de la misma señala fechas que no son acordes con la realidad. , por lo tanto es absolutamente nula, solicitando su declaratoria por parte del Tribunal.

30. Solicita expresamente el agotamiento de la vía administrativa.

II.- La Dirección General de Aduanas **dicta la resolución N° RES-AL-0414-97 el 28 de 1997**, señalando "...resuelve declarar sin lugar el reclamo interpuesto por la señora Olga Martha Chinchilla Zúñiga, cedula 1-533-577, heredera universal de la sucesión del señor Pablo Chinchilla Castro por daños y perjuicios ocasionados por el cierre de la agencia Aduaneros Pablo Chinchilla S.A., de la cual el señor Pablo Chinchilla fue Agente Aduanero. Lo anterior, en virtud de haber operado la prescripción para el reclamo de cualquier derecho según la disposición del artículo 868 del Código Civil." Posteriormente dicta la resolución N° RES-AL-0626-97 el

16 de octubre de 1997, declarando sin lugar el recurso de reconsideración al manifestar "...rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por ser improcedente, ya que efectivamente transcurrió el plazo en el que válidamente la sucesión del señor Pablo Chinchilla, pudo reclamar los presuntos daños y perjuicios ocasionados por el cierre de la Agencia Aduanal Aduaneros Pablo Chinchilla S.A. En cuanto al recurso de apelación se deja constancia de que fue interpuesto dentro del término legal, sin embargo por no estar constituido aún el Tribunal Aduanero Nacional, ni tratarse de materias que sean competencia del Comité Arancelario, ni del Comité de Valoración Aduanera, únicamente se remite ante el superior en grado, sea el Ministro de Hacienda, para los efectos que estime pertinentes." Por último dicta la resolución N° RES-AL-434-98 el día 12 de noviembre de 1998, por la cual admite el recurso de apelación y emplaza por diez días a la parte recurrente, de conformidad con el artículo 203 de la Ley General de Aduanas.

Redacta el Lic. Soto Sequeira; los considerados 6 y 7 los redacta el Lic. Martínez Lorfa; y,

CONSIDERANDO

III.- HECHOS PROBADOS. Se tienen por demostrados en lo relevante al caso los siguientes hechos: **1)** El día 16 de enero de 1980 mediante oficio N° A-17-80, el auditor de la Dirección General de Aduanas emite informe sobre la agencia Aduaneros Pablo Chinchilla S.A. relacionado con pólizas de desalmacenaje tramitadas en la Aduana de Limón (folios 37 al 39 del exp. adm. legajo N° 4); **2)** El día 28 de enero de 1980 el Lic..Vargas Chaves en su condición de asistente legal de la Dirección General de Aduanas, denuncia a la Agencia Aduanal denominada Aduaneros Pablo Chinchilla S.A. representada por el señor Pablo Chinchilla por los presuntos delitos de contrabando y defraudación fiscal ante la Agencia Segunda Fiscal del Poder Judicial (folios 31 al 35 del exp. adm. legajo N°1) ; **3)** Mediante la resolución N° RES-DL-262-82 del día 20 de octubre de

1982, la Jefe de la Asesoría Legal de la Dirección General de Aduanas le concedía a la empresa Aduaneros Pablo Chinchilla S.A. un plazo de cinco días para escuchar los argumentos y defensas sobre la falta de caución y sus consecuencias legales (folios 120 y 121 del exp.adm. legajo N° 2); **4)** Con resolución de las once horas treinta minutos del 24 de enero de 1983, se cita a comparecencia oral y privada al señor Pablo Chinchilla S.A. en su condición de presidente de la sociedad Aduaneros Pablo Chinchilla S.A., para que se apersone al Departamento Legal del Ministerio (folio 115 del exp. adm. legajo N° 2); **5)** Mediante acuerdo del Poder Ejecutivo N° 19 de fecha 15 de marzo de 1983 se suspende por el término de seis meses la autorización para actuar como Agente Aduanero otorgada a la agencia Aduaneros Pablo Chinchilla S.A., por no tener garantía vigente, conforme con lo ordenado por la sección 10:15 del Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano I (folio 80 del exp adm. legajo N° 1); **6)** El día 19 de noviembre de 1996 la señora Olga Martha Chinchilla Zuñiga, presenta reclamo por daños y perjuicios causados a lo largo de dieciséis años y solicita la suma de doscientos setenta y cinco millones de colones como indemnización ante la Dirección General de Aduanas y gestiona la nulidad de actos y actuaciones dictados por autoridades aduaneras y del Poder Ejecutivo (folios 01 al 21 del expediente administrativo principal, legajo N° 5); **7)** Mediante resolución N° 3107-97 el 04 de junio de 1997, la Sala Constitucional declara con lugar el recurso de amparo concediendo a la administración un plazo de un mes a partir de la notificación de la sentencia, para que proceda a contestar e informar al recurrente sobre la gestión presentada en fecha 19 de noviembre de 1996 (folios 79 al 86, exp. adm. Legajo N° 5); **8)** El día 28 de mayo de 1997, la Dirección General de Aduanas dicta la resolución N° RES-AL-0414-97 sobre el reclamo por daños y perjuicios presentado por la recurrente (folios 87 al 92 del exp. adm., legajo N° 5); **9)** La recurrente interpone el 10 de junio de 1997, los recursos de reconsideración y apelación en subsidio para ante el Tribunal Aduanero Nacional contra la resolución N° RES-AL-0414-97 (folios 94 al 100 del exp. adm., legajo N° 5); **10)** Mediante resolución N° 5369-97 el 05 de setiembre de 1997, la Sala Constitucional declara con lugar el recurso de amparo ordenando a la

administración conocer y resolver los recursos interpuestos mediante escrito de 10 de junio de 1997 dentro del plazo de ocho días hábiles contados a partir de la comunicación de esta resolución (folios 104 al 107 del exp. adm., legajo N° 5) ;

11) El 16 de octubre de 1997 la Dirección General de Aduanas dicta la resolución N° RES-AL-0626-97 declarando sin lugar el recurso de reconsideración (folios 108 al 118 del exp. adm., legajo N° 5) ;

12) Con oficio N° 1353-97 del 16 de octubre de 1997 el Director de Aduanas remite el recurso de apelación y expediente administrativo al despacho del Señor Ministro e informa sobre el voto N° 5369-97 de la Sala Constitucional (folio 122 exp adm. Legajo N° 5);

13) Con oficio N° AL-1419-97 del 27 de octubre de 1997, el Director de Aduanas traslada escrito de la recurrente con fecha de ese mismo día, para que el Señor Ministro decida el tramite a seguir (folios 128 y 129 del exp. adm legajo N° 5) ;

14) La recurrente presenta sus manifestaciones contra la resolución N° RES-AL-0626-97(folios 131 al 136 del exp. adm. Legajo N° 5) ;

15) La Dirección Jurídica del Ministerio de Hacienda mediante oficio N° DJH-1306-97 del 08 de diciembre de 1997 solicita al Señor Ministro instrucciones precisas sobre el expediente a nombre de la señora Olga Martha Chinchilla Castro, respecto al recurso de apelación y el órgano competente para conocerlo (folios 144 al 146 del exp. adm. Legajo N° 5) ;

16) La Directora Jurídica del Ministerio de Hacienda con el oficio N° DJH-1323-97 del 11 de diciembre de 1997, emite el dictamen legal para que se presente a la Procuraduría General de la República (folios 147 al 150 del exp. adm. Legajo N° 5);

17) Mediante oficio N° DM-1238-97 de 11 de diciembre de 1997 se remite consulta a la Procuraduría General de la República (folios 151 y 152 del exp. adm. Legajo N° 5) ;

18) El Director General de Aduanas mediante oficio N° AL-446-98 del 16 de abril 1998, solicita el expediente al despacho del señor Ministro, en virtud del criterio externado por la Procuraduría, respecto a que el órgano competente para conocer de las apelaciones era el Tribunal Aduanero Nacional (folio 158 exp. adm. Legajo N° 5) ;

19) El 09 de julio de 1998 el señor Vice- Ministro de Ingresos emite el oficio N° AL-704-98 solicitando el expediente al despacho del señor Ministro, a efecto de enviar el recurso al Tribunal Aduanero Nacional (folio 159 del exp. adm. Legajo N° 5) ;

20) El 18 de agosto de 1998 se

recibe en el Tribunal Aduanero Nacional el oficio N° DJH-0967-98 mediante el cual se envía el expediente y recurso de apelación interpuesto por la señora Chinchilla Zúñiga (folio 160 del exp adm legajo N° 5); **21)** El 22 de setiembre de 1998 la Licda. Contreras Briceño presenta inhibitoria para conocer del presente asunto de conformidad con el artículo 42 de la Constitución Política (folio 161 del exp. adm. Legajo N° 5); **22)** El Tribunal dicta el auto N° 057-98 el día 06 de octubre de 1998 separando a la Licda. Contreras Briceño del presente asunto (folio 163 del exp. adm. Legajo N° 5); **23)** Con oficio N° TAN-104-98 del 06 de octubre de 1998, la presidencia del tribunal solicita a la Oficialía Mayor se nombre suplente abogado para el expediente N° 98-0095-DP (folio 164 del exp. adm. Legajo N° 5); **24)** La Jefatura de la Asesoría Legal de la Dirección General de Aduanas emite el oficio N° AL-1095-98 del 28 de octubre de 1998 trasladando copia de la resolución N° 04558-98 del 26 de junio de 998 de la Sala Constitucional, con la cual declara con lugar el recurso de amparo y ordena resolver y notificar lo que corresponda sobre el recurso de apelación interpuesto por la recurrente (folios 170 al 176 del exp. adm. Legajo N° 5); **25)** Mediante oficio N° TAN-116-98 de 04 de noviembre de 1998, se solicita a la Oficialía Mayor nombrar suplente abogado para conocer el recurso de apelación (folio 177 exp. adm. Legajo N° 5); **26)** El Tribunal dicta el auto N° 60 el día doce de noviembre de 1998 ordenando la devolución del expediente a la Dirección General de Aduanas para que admita y emplace a la parte recurrente de conformidad con el numeral 203 de la Ley General de Aduanas (folios 178 al 184 del exp. adm. Legajo N° 5); **27)** La Sub- Dirección General de Aduanas dicta la resolución N° RES-AL-434-98 el 12 de noviembre de 1998, admitiendo el recurso y emplazando a la parte para ante el Tribunal Aduanero Nacional (folio 185 del exp. adm. Legajo N° 5); **28)** La recurrente presenta el día 18 de noviembre de 1998 escrito al Tribunal (folios 187 al 191 del exp. adm. legajo N° 5); **29)** Con acuerdos del Poder Ejecutivo números 77-H y 78-H se nombra como miembro suplente al Lic. Martínez Loría en el período comprendido entre el 11 y 20 de noviembre de 1998, y con acuerdo N° 79 nombra al Lic. Garita López durante los días 12 y 13 de noviembre (folios 192,193 y 202 del exp.adm. legajo N° 5); **30)** Con oficio N° TAN-120-98 del 23 de noviembre de

1998, se solicita el nombramiento de suplente para el período del 26-11-98 al 04-12-98(folios 194 y 195 del exp. adm. legajo N° 5); **31)** Con pronunciamiento N° C-012-98 de fecha 21 de enero de 1998, la Procuraduría General de la República atiende consulta solicitada por el Señor Ministro de Hacienda según oficio N° DM-1238-97 (folios 196 al 201 del exp. adm. legajo N° 5); **32)** El día 30 de noviembre de 1998 la recurrente presenta escrito al Tribunal argumentando nulidades de actos dictados por la Dirección General de Aduanas y los daños y perjuicios ocasionados (folios 203 al 222 del exp. adm. legajo N° 5)

IV.- HECHOS NO PROBADOS: Para el dictado de la presente resolución no se observan hechos de relevancia que se tengan por no demostrados.

V. SOBRE EL FONDO **1)** La creación y competencias del Tribunal Aduanero Nacional, en adelante Tribunal, se encuentran prescritas en los artículos 91 y 93 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano II, en adelante CAUCA II, y en el título IX, capítulo único de la Ley General de Aduanas, en adelante L.G.A. – ver artículos 205 al 210 - El recurso de apelación contra actos dictados por el Director General de Aduanas lo regula el numeral 204 de la L.G.A. La materia que trata el presente recurso de apelación refiere a gestiones de nulidad y el reclamo de daños y perjuicios contra la Administración por conducta lícita, reguladas en los artículos 158 al 179 y 194 al 198 de la Ley General de la Administración Pública, respectivamente. Al solicitar la recurrente la declaratoria de vicios por nulidad de actuaciones y actos administrativos, emitidos por autoridades aduaneras, procede el Tribunal, prima facie, a resolver lo que considera al respecto, por constituir las nulidades cuestiones de orden público y materia de previo y especial pronunciamiento, por mandato expreso del artículo 195 de la L.G.A, y las normas supletorias que encuentran su regulación al tratar la materia de nulidades en la Ley General de la Administración Pública, en adelante L.G.A.P., por remisión de los artículos 192 y 208 de la L.G.A. Las pretensiones de nulidad están fundamentadas por la recurrente en actuaciones y actos administrativos de funcionarios de la Dirección General de Aduanas **ocurridos el día 16 de enero**

de 1980 mediante **oficio N° A-17-80**, emitida por el auditor de aduanas, relativo al informe de la agencia Aduaneros Pablo Chinchilla S.A., sobre las pólizas de desalmacenaje tramitadas en la Aduana de Limón ; **la denuncia de fecha 28 de enero de 1980**, por los presuntos delitos de contrabando y defraudación fiscal presentada ante la Agencia Segunda Fiscal del Poder Judicial, contra la Agencia Aduanal denominada Pablo Chinchilla S.A representada por Pablo Chinchilla; **la resolución N° RES-DL-262-82 del día 20 de octubre de 1982**, donde se reconocía a la interesada un plazo de cinco días para escuchar los argumentos sobre la falta de garantía para operar y sus consecuencias legales; y **la resolución N° RES-AL-434-98 el 12 de noviembre de 1998, admitiendo el recurso de apelación y emplazando a la parte para ante el Tribunal Aduanero Nacional** (folio 185 del exp. adm. Legajo N° 5) ; la resolución de las once horas treinta minutos del 24 de enero de 1983, donde se cita a comparecencia oral y privada al señor Pablo Chinchilla Castro en su condición de presidente de la sociedad Aduaneros Pablo Chinchilla S.A. empresa, para que se apersone al Departamento Legal del Ministerio de Hacienda por carecer de garantía la agencia. También se refiere a la nulidad por la suspensión ordenada por el Poder Ejecutivo mediante Acuerdo Ejecutivo N° 19 de fecha 15 de marzo de 1983 que suspende por el término de seis meses la autorización para actuar como Agente Aduanero a la agencia Aduaneros Pablo Chinchilla S.A. por no tener garantía vigente. Se aclara que el dictado de la presente resolución toma en cuenta los cuatro primeros asuntos- aquí señalados- de los cuales resulta competente el Tribunal en razón de la materia discutida, siendo esta la alegada nulidad de actos y actuaciones de las autoridades aduaneras en el ejercicio de sus competencias, según consta en expediente administrativo. Respecto de las nulidades alegadas sobre la resolución del 24 de enero de 1983 dictada por el Departamento Legal del Ministerio de Hacienda, el acuerdo del Poder Ejecutivo N° 19 de fecha 15 de marzo de 1983, y el reclamo de los daños y perjuicios, incoados por la recurrente, se omite pronunciamiento por parte de este Tribunal, por no estar contempladas dentro de sus competencias, por las razones y fundamentos jurídicos que se dirán con posterioridad.

2) Es dable aclarar a los efectos de la presente resolución y de las competencias asignadas por ley a los órganos que conocen materia aduanera misma que ha sido objeto de un proceso de desconcentración administrativa con relación a las competencias reconocidas al Ministerio de Hacienda. Por este proceso se le ha otorgado a **la Dirección General de Aduanas el calificativo de organismo superior aduanero**, con competencias para dirigir técnica y administrativamente las funciones aduaneras, la emisión de políticas y directrices para las actividades de las aduanas y dependencias a su cargo, el ejercicio de las atribuciones aduaneras y la decisión de las impugnaciones aduaneras interpuestas ante ella. Los numerales 5, 9, 10 del CAUCA II - Ley con rango comunitario-, y los artículos 8, 9, 11, 12, 22,23,24 ,25,26 y 27 entre otros de la L.G.A. así lo ordenan. Al Tribunal se le otorga por ley competencias para conocer y decidir en última instancia administrativa los recursos ordinarios y agotar la vía administrativa. Para mayor comprensión de lo expuesto se transcribe a continuación el artículo 205 de la L.G.A, puesto que define concretamente sus competencias, de la siguiente manera, “ **Competencia.** Créase el Tribunal Aduanero Nacional como órgano de decisión autónoma, adscrito al Ministerio de Hacienda. **Tendrá competencia para conocer y decidir, en última instancia administrativa, los recursos contra los actos dictados por el Servicio Nacional de Aduanas.** – ver artículos 91 y 93 del CAUCA II, y 83 de la L.G.A.P, el último sobre la desconcentración - (Lo resaltado en negrita no es del original). Desconcentración administrativa que está reconocida expresamente por la Procuraduría General de la República en los dictámenes C-012-98 de fecha 21 de enero de 1998 y C-033-98 de 25 de febrero de 1998. Señala el órgano superior consultivo que “ En cuanto a la posibilidad de que el Ministro de Hacienda proceda a conocer y resolver los recursos que hayan incoado contra los actos de la Dirección General de Aduanas, cabe recordar **que la materia aduanera** ha sido objeto de un **proceso de desconcentración máxima**, que abarca tanto poder de decidir en primer instancia como el conocimiento de los recursos jerárquicos. Se ha producido un cambio en el orden objetivo de competencias, de manera que **no corresponde al**

Ministro dictar actos en materia aduanera, incluso los necesarios para el agotamiento de la vía administrativa. No está llamado el Ministro a ejercer tutela jurídica y material sobre los actos de la Administración Aduanera, puesto que ésta al actuar ejercita competencias atribuidas directamente por el ordenamiento. (Lo resaltado en negrita no es del original).

3) En el sentido de las competencias es objeto de consideración por este Tribunal a la hora de resolver el recurso de apelación, la orden de la Sala Constitucional contenida en la resolución N° 04558-98 de fecha 26 de junio de 1998, que dispone “ Por lo tanto, el Ministerio de Hacienda debe, en el plazo que se indicará en la parte dispositiva de esta sentencia, resolver lo que corresponda sobre el recurso de apelación incoado por al (sic) amparada en contra de la resolución número RES-AL-0414-97. Sea que remita el asunto al Tribunal Aduanero Nacional constituido (en caso de que a la fecha en que se notifique esta sentencia tal constitución haya sido efectiva), o bien que asuma las competencias propias del Tribunal Aduanero Nacional, hasta tanto el mismo sea debidamente conformado.”

4) Referido concretamente a las pretensiones de la recurrente en materia de nulidades de actos y actuaciones emitidos por autoridades aduaneras, debemos indicar lo tocante al plazo para alegar nulidades por parte de los administrados. Tenemos así que el numeral 175 de la L.G.A.P señala “ **Caducará en cuatro años la potestad del administrado para impugnar el acto absolutamente nulo en la vía administrativa y jurisdiccional, sin que se apliquen al respecto los plazos normales de caducidad.**” (El resaltado en negrita no es del original)

Respecto al citado artículo 175 se debe hacer una distinción fundamental respecto de los plazos y su vencimiento tratándose de situaciones jurídicas tutelables respecto de recursos y de acciones. Para esclarecer el punto citamos las manifestaciones del Dr. Ortiz Ortiz al señalar que “ Uno y otro tipo de plazos cumplen una función, dada su diversa naturaleza, por motivo u objeto: en tanto los

plazos de prescripción afectan el derecho y su existencia, los de caducidad afectan las potestades (de recurrir y de accionar) protectoras de aquél, por lo que, cuando el derecho es uno de crédito por daños y perjuicios irrogados, los plazos de prescripción servirán para extinguir el derecho subjetivo correspondiente, y los de caducidad de los recursos administrativos y de las acciones contenciosas sólo para hacer lo propio con las potestades formales referidas o su ejercicio, tocantes a la anulación del acto. Al expirar estas potestades o su oportunidad de ejercicio, el acto dejará de ser atacable en sí y ya no podrá ser anulado; pero el derecho al resarcimiento generado por ese acto, en tanto que este último es lesivo e ilegal, lo sobrevivirá, conjuntamente con sus plazos de prescripción, para habilitar cualquier acción de responsabilidad contra la administración fundada en la ilegalidad- no en la anulación- de ese acto, mientras esa prescripción no se haya operado.”

Continúa comentando el Dr Ortiz “ ...Hay un plazo de cuatro años para agotar la vía administrativa a efectos de la impugnación. Agotada la vía, empezará a correr un nuevo plazo de cuatro años para la impugnación jurisdiccional contenciosa del acto. Expirado este último plazo sin esa acción de anulación el acto no será ya anulable, pero, según lo dicho, su desaplicación podrá servir de base prejudicial antecedente para fundamentar acciones de responsabilidad contra la Administración, mientras el derecho o situación jurídico- subjetiva violados no hayan prescrito según su régimen sustantivo y material propio.”

De lo expuesto se aprecia que la gestión de nulidad absoluta interpuesta contra **el informe de auditoría N° A-17-80, la denuncia presentada al Ministerio Público de fecha 28 de enero de 1980, la resolución N°. RES-DL-262-82 del día 20 de octubre de 1982, los plazos se encuentran caducos**, por haber transcurrido sobradamente los **cuatro años de ley** al momento de presentarse el escrito de fecha **19 de noviembre de 1996** en que se alegan las nulidades ante la Dirección General de Aduanas, por mandato expreso del numeral 175 de la

L.G.A.P y la doctrina patria citada. Sobre la gestión de nulidad de la RES-AL-434-98 será objeto de estudio en un considerando aparte.

5) Respecto a la incompetencia del Tribunal sobre las pretensiones de la recurrente relativas al acuerdo del Poder Ejecutivo N° 19 de fecha 15 de marzo de 1983, y el reclamo de los daños y perjuicios, se debe informar lo siguiente. Con acuerdo N° 188-H de fecha 22 de diciembre de 1975, el Presidente de la República y el Ministro de Hacienda autorizan a la sociedad en cuestión, a actuar como agente aduanero ante las aduanas del país.(Folio 13 exp adm, legajo N°2). Posteriormente en el año 1983, el señor Presidente de la República en ejercicio y el señor Ministro de Hacienda designado en el momento, firman el Acuerdo Ejecutivo N° 19 de fecha 15 de marzo de 1983, ordenando la suspensión de la agencia aduanera. Por ende, es exclusiva y excluyente del Presidente de la República actuando de consuno con el Ministro del Ramo de Hacienda, ejercer tutela jurídica y material sobre dichos actos y actuaciones, puesto que las competencias así lo ordenan. Tal afirmación tiene sustento en los numerales 140 de la Constitución Política, 129 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano I, Ley N° 3421, Sección 10:00 y 10:16 del Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano I – normativa que le aplicaron al caso por cuanto los actos se dieron encontrándose tales normas aduaneras vigentes -; 11, 21.2, 23 inciso e), 25, 27, 28 inciso b), 59, 126 inciso a) de la L.G.A.P. Sobre la tutela – gestión de nulidad en contra de este acto- de la resolución de 24 de enero de 1983 dictada por el Departamento Legal del Ministerio corresponde al Ministro su conocimiento y resolución por ser el Jefe del órgano emisor.

En este mismo sentido dispone el numeral 126 de la L.G.A.P. “ De los Actos que Agotan la Vía Administrativa. **Pondrán fin a la vía administrativa los actos emanados de los siguientes órganos y autoridades, cuando resuelvan definitivamente los recursos de reposición o de apelación previstos en el Libro segundo de esta Ley, interpuestos contra el acto final: a) Los del Poder Ejecutivo, Presidente de la República y Consejo de Gobierno, o, en su caso,**

los del jerarca del respectivo Supremo Poder; ...” (Se remite al contenido del artículo 127 de la L.G.A.P.)

Por lo expuesto, no corresponde al Tribunal conocer y decidir los aspectos de nulidad alegados en contra del Acuerdo N° 19 y el reclamo por los daños y perjuicios incoados, y la resolución de fecha 24 de enero de 1983, en respeto de la distribución de competencias antes indicada, y del bloque de legalidad que rige nuestro estado de derecho. Lo procedente es, en los extremos aquí pretendidos por la recurrente, remitir el expediente administrativo que consta de cinco legajos, numerados del uno al cinco; el legajo N° 1 consta de 82 folios; el legajo N° 2 consta de 127 folios; el legajo N° 3 consta de 6 folios; el legajo N° 4 consta de 59 folios y el legajo N° 5 de 231 folios; con el original de esta sentencia al Despacho del Señor Ministro de Hacienda para hacer de su conocimiento las nulidades alegadas sobre el acuerdo N° 19, la resolución de 24 de enero de 1983 y el reclamo por daños perjuicios interpuesto por la señora Olga Martha Chinchilla Zuñiga y se sirva ordenar lo que en derecho corresponda. Toda vez que el Tribunal no tiene facultad legal para revisar la legalidad de actos dictados por el Presidente de la República y el Ministro de Hacienda ni para conocer y decidir las pretensiones de la recurrente en materia de daños y perjuicios porque no ser materia aduanera la que discute en este extremo.

6) En relación con la solicitud de la recurrente sobre la **aclaración y adición** del Auto N° 60 de las catorce horas con siete minutos del día doce de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, es de señalar que la misma es improcedente al momento de desarrollo de este procedimiento, básicamente porque lo resuelto corresponde a un auto de emplazamiento que tiene por finalidad dos objetivos procesales: en primer término cumplir con el debido proceso, facultando a la recurrente a ampliar o mejorar sus argumentaciones o bien aportar al expediente nuevos elementos para respaldar sus pretensiones, aspecto que tiene su fundamento en el artículo 203 de la Ley General de Aduanas; en segundo lugar, permitir el conocimiento de este Tribunal del asunto en cuestión, a través del

requisito de la admisibilidad por parte del a quo, requisito necesario para entablar la relación procesal, (véase en punto al emplazamiento y la admisibilidad, las resoluciones 044-98 de las 8:15 del 8 de setiembre de 1998, 018-98 de las 9:04 del 9 de julio de 1998, 011 de las 8:43 del 9 de julio de 1998, dictadas por este Tribunal entre otras).

7) Sobre la nulidad alegada de la resolución de emplazamiento número RES AL-434-98 de las nueve horas del día doce de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, dictada por la Dirección General de Aduanas, efectivamente se perciben una serie de errores materiales en relación con la fecha de emisión, la referencia de la resolución impugnada y el número que identifica el año de esa resolución. Estos errores a criterio de este Tribunal, no han logrado quebrantar el derecho de defensa, toda vez que no han impedido a la recurrente hacer uso de su derecho de hacer alegaciones y presentar argumentaciones a favor de sus pretensiones. Considera este Tribunal, que existen en el expediente evidencias, que permiten concluir que la resolución de la Dirección General, fue resuelta, aprobada y revisada por la Asesoría Legal, y por lo tanto aprobada por el señor Sub- Director el día 13 de noviembre. Entre estas evidencias podemos citar que según constancia de notificación que corre al folio 184 el N° 60 del Tribunal se notificó el día 13 a la Administración Activa, que la Asesoría Legal de la Dirección General Aduanas dio visto y bueno a la resolución de admisión y emplazamiento N° RES-AL-434- 98 el día 13 según consta en el folio 185, y que la notificación a la recurrente se dio el mismo 13 a las 14 horas con 10 minutos, según consta en el folio 186, todos del legajo N° 5 del expediente de marras - Por su parte, resultó claro para la recurrente, según ella misma lo expone, que la resolución que se impugna es la RES AL-0414 –97 de las ocho horas del 28 de mayo de 1997 y no la RES AL-414 –87 del 28 de junio de 1997, como erróneamente indicó la Administración emplazante, no encontrándose vicios administrativos que afectan la eficacia del acto. Se hace saber, sin embargo a la Administración Activa que las actuaciones de notificación deben quedar constando tanto en el texto original del acto que se notifica como en el que se entrega a las partes, con el fin de que

la actuación administrativa evidencie la transparencia y seguridad para las partes que impone el derecho administrativo. Se hace, asimismo, del conocimiento de la recurrente, que obra en expediente, al folio 186 los lugares y las fechas de notificación de la resolución que se objeta (folio 157 de la L.G.A.P.)

POR TANTO

Con fundamento en los artículos 91 y 93 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano II, demás normativa citada en el cuerpo de la sentencia, relación de hechos y argumentos expuestos; se resuelve: **1.** Respecto a las nulidades alegadas sobre el informe del Departamento de Auditoría N° A-17-80 de fecha 16 de enero de 1980; la denuncia presentada al Ministerio Público de fecha 28 de enero de 1980; la resolución N°. RES-DL-262-82 del día 20 de octubre de 1982 se rechaza el recurso de apelación interpuesto, por encontrarse caduca la gestión de nulidad promovida por la recurrente. **2.** Se rechaza por improcedente la solicitud de adición y aclaración interpuesta, y la gestión de nulidad de notificación de la resolución de emplazamiento N° RES-AL-434-98 emitida por la Sub Dirección General de Aduanas, confirmándose sus efectos. Sobre los extremos 1 y 2 de la parte dispositiva de esta sentencia se da por agotada la vía administrativa por haberlo solicitado expresamente la recurrente, no obstante aclara el Tribunal que la gestión está caduca sobre las pretensiones contenidas en el punto número uno indicado. **3)** Sobre los extremos de nulidad alegadas del acuerdo N° 19 de fecha 15 de marzo de 1983 firmado por el Poder Ejecutivo, la resolución de fecha 24 de enero de 1983 y el reclamo por daños y perjuicios interpuesto, lo procedente es remitir el original de la sentencia completa al Despacho del Señor Ministro para hacer de su conocimiento las pretensiones incoadas, por la señora Olga Martha Chinchilla Zúñiga expuestas principalmente en escritos de fecha 19 de noviembre de 1996, de 10 de junio de 1997, de 27 de octubre de 1997 y de 30 de noviembre de 1998, al fundamentar sus pretensiones y recurso de apelación, se sirva ordenar lo que en derecho corresponda. Los cinco expedientes se trasladan al Despacho del Ministro de Hacienda, informando a la

Dirección General de Aduanas, oficina donde pertenecen, para los controles y registros de rigor. Voto salvado del licenciado Reyes Vargas quien declara la incompetencia del Tribunal para resolver el presente asunto.

Notifíquese, a la recurrente en las oficinas de la Licenciada Matilde Vargas Guzmán, sita 100 mts norte de la casa Matute, casa esquinera de dos plantas; a la Dirección General de Aduanas en sus oficinas centrales, al señor Ministro de Hacienda en sus oficinas centrales.

Loretta Rodríguez Muñoz,
Presidenta,

Alejandra Céspedes Zamora

Dick Rafael Reyes Vargas,

Luis Alberto Gómez Sánchez

Desiderio Soto Sequeira,

José Alberto Martínez Loría

Elizabeth Barrantes Coto.

VOTO SALVADO DEL LICENCIADO REYES VARGAS. Estima el suscrito conveniente, de previo al fondo del asunto, recordar que en la tramitación del presente asunto, la recurrente ha probado innecesariamente la inercia de la Administración, cuyas causas son muchas y difíciles de resolver. En ese sentido se ha visto obligada a recurrir a la Sala Constitucional, a fin de que ésta ponga en funcionamiento la obsoleta maquinaria estatal. Producto de la presión de tales gestiones es que el Estado ha venido resolviendo las reclamaciones de la gestionante. A ello no escapan las actuaciones de este Tribunal al cual se remiten las actuaciones en agosto de 1998, no obstante encuentran un obstáculo temporal, legalmente necesario para garantizar imparcialidad, en la inhibitoria de uno de los integrantes y la ausencia de suplentes designados. No es sino con la remisión que hace la Dirección General de Aduanas, en noviembre 4 de los corrientes de la resolución de la Sala Constitucional número 4558-98, que la

Presidencia Interina de este Tribunal procura con resultados, de las autoridades del Ministerio el nombramiento de suplentes a fin de salvar el obstáculo y conocer del recurso. Es así como al analizar los autos, el Tribunal considera procedente devolverlos a fin de que se admita la apelación y emplace a la parte para que esta pueda apersonarse, manifestar lo que estime pertinente y no causar indefensión, lo cual, la admisión y el emplazamiento, realiza la Administración recurrida, dentro del plazo otorgado por la Sala Constitucional en su resolución supramencionada. Cumplido lo anterior y de regreso los autos a este Tribunal, se procede a conocer del recurso planteado.

Origen de la reclamación. En los últimos meses de 1979, la Dirección General de Aduanas realiza una auditoria en la Aduana de Limón. En enero de 1980, el Lic. Humberto Segura, Jefe del Departamento de Auditoria de la Dirección General de Aduanas, rinde informe lo que considera como actuaciones irregulares, que se relacionan con los tramites de la agencia de aduanas **Aduaneros Pablo Chinchilla S.A.** (hecho Probado 1). En razón del informe anterior, la Dirección General de Aduanas por intermedio de su Departamento Legal realiza, en lo de interés, dos gestiones básicas, la primera consiste en poner en conocimiento del Ministerio Publico las irregularidades encontradas a fin de que se determine los supuestos responsables y se les juzgue por contrabando o defraudación fiscal; la segunda de las actuaciones consiste en iniciar a la agencia de aduanas **Aduaneros Pablo Chinchilla S.A.**, y a su agente aduanero acreditado señor Pablo Chinchilla Castro procedimiento administrativo para determinar su responsabilidad, tanto fiscal como disciplinaria.

Otra actuación de interés, a que refiere la recurrente como derivada de las anteriores, es la relacionada con procedimientos incoados por la Dirección General de Aduanas contra la sociedad Aduaneros Pablo Chinchilla S.A., dirigido a establecer la responsabilidad disciplinaria, por no tener garantía. El mismo da inicio con la resolución número RES-DL-262-82 de octubre 20 de 1982, y concluye con la suspensión de la autorización, por periodo de seis meses, que hiciera el Poder Ejecutivo según acuerdo número 19 de marzo 15 de 1983.

Respecto de tales actos, es que la recurrente teje la relación de hechos y omisiones que, deja ver, le causaron perjuicio a la sociedad de cita, a su padre y familia. Como su fundamento de su reclamación por daños y perjuicios ocasionados, señala lo que estima una serie de nulidades en las actuaciones e incluso hace ver su criterio de que las mismas no han prescrito dado que:

Respecto de la causa judicial investigada, por la denuncia que hiciera la Dirección General de Aduanas, en ningún momento se le comunico, a su padre o la sociedad que representaba la denuncia, ni por parte de la Dirección de Aduanas ni por el Poder Judicial, tampoco se le cito o tomo declaración y posteriormente se dicto desistimiento.

Relacionado con la suspensión de seis meses no se le notifico legalmente la misma.

Naturaleza del Tribunal Aduanero Nacional. De previo a resolver lo procedente en este caso, en criterio del suscrito resulta imprescindible referirnos a la naturaleza jurídica del Tribunal Aduanero Nacional, a fin de determinar sus competencias conforme con nuestro régimen jurídico. En tal sentido debo señalar que ya en otras resoluciones he manifestado que el Tribunal Aduanero, respecto de los actos del Servicio Nacional de Aduanas resulta un superior no jerárquico, en virtud de una desconcentración máxima, operada por ley, que le otorga la competencia de decidir en última instancia administrativa. Sobre el punto la Procuraduría General de la República ha manifestado:

“En cuanto a la posibilidad de que el Ministro de Hacienda proceda a conocer y resolver los recursos que hayan sido incoado contra los actos de la Dirección General de Aduanas, cabe recordar que la **materia aduanera** ha sido objeto de un proceso de desconcentración máxima, que abarca tanto el poder de decidir en primera instancia como el conocimiento de los

recursos jerárquicos.” (Pronunciamiento No. C-O12-98 de enero 21 de 1998) (El resaltado no es del original).

A lo anterior hemos de agregar que la Sala Constitucional en su voto No. 1148-90 de las 17 horas de setiembre 21 de 1990, en lo de interés señalo:

“Así por ejemplo, no parece incompatible con la Constitución la existencia del Tribunal Fiscal Administrativo (Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Ley No. 4755 de 3 de mayo de 1971), en la medida en que, si bien se integra y funciona de manera semejante a la de los tribunales de justicia – “tribunales” propiamente dichos -, **en realidad solo es un órgano de tutela administrativa o jerárquico impropio** respecto de la llamada “Administración Tributaria”, y sus fallos no tienen otro efecto que el de agotar la vía administrativa, abriendo paso a la acción jurisdiccional propiamente dicha.” (El resaltado no es del original).

Como puede verse, tal desconcentración y competencia opera para una materia específica, la técnico-aduanera. Tal situación no es exclusiva de la Administración Tributaria Aduanera, sino que opera desde hace mucho tiempo respecto de otras administraciones como la registral, la técnica de aviación civil, la municipal, cuyo superior jerárquico resulta ser el Tribunal Superior De lo Contencioso Administrativo, la Tributaria cuyo competencia de agotamiento de vía le corresponde la Tribunal Fiscal Administrativo siempre en tratándose de tributos nacionales, la de servicio civil que agotaba el Tribunal de Servicio Civil, etc. Los recursos ante tales órganos de agotamiento de la vía administrativa, como se observa son no jerárquicos en sentido estricto, por lo que se les conoce como jerárquicos impropios. Su competencia, se justifica en la necesidad de que sea un órgano especializado, jurídica y técnicamente, como autónomo en su decisión, es decir ajeno a criterios de oportunidad, conveniencia, políticos y otros, de manera que permita garantizar una actuación conforme a derecho, de la Administración, mediante la revisión de la legalidad de sus actuaciones por estos órganos. En

virtud de los fines y competencias asignados a los jerarcas impropios, y con el fin de evitar la tendencia humana de invadir competencias, es que a los mismos se le fijan una serie de limitaciones en el ejercicio de las mismas. Entre ellas tenemos la imposibilidad de revisar oficiosamente las actuaciones de la administración A Quo, la de anular de oficio, la de conocer únicamente por vía recursiva y limitado a las pretensiones y cuestiones de hecho planteadas por el recurrente (arts. 180, 181, 184 de la Legap.)

Incompetencia del Tribunal Aduanero Nacional. En este momento, que es la oportunidad procesal en que este Tribunal entra a conocer, para resolver como corresponde al presente caso, es cuando un criterio del suscrito se plantea como posición o tesis, la incompetencia del Tribunal Aduanero Nacional tanto en razón de la materia como del sujeto que emite los actos, que supuestamente irrogan perjuicio a la recurrente. En efecto el tema de la competencia y sus limites no siempre resulta sencillo de establecer. Para conocer sus limites, es necesario no solo analizar la materia en sentido estricto, sino que la misma se relaciona en razón del sujeto o sujetos participantes en la emisión del acto, de manera que la jurisprudencia, sobre el punto ha diferenciado entre actos simples y complejos. Al respecto ha señalado que los jerarcas impropios están imposibilitados de conocer respecto de los actos o actuaciones que aunque respondan a la materia específica, resultan ser complejos es decir requieren para su formación de la voluntad no solo del órgano de la administración respecto del cual resultan ser el Ad Quem, sino que requiere de la voluntad de otro órgano, del cual resultan incompetentes. A manera de ejemplo y en materia aduanera podemos señalar aquellos actos en que existe la participación del Servicio Nacional de Aduanas, recomendando o pronunciándose sobre la procedencia o improcedencia de una autorización o concesión, como ocurría en la anterior legislación con los agentes aduaneros y los almacenes fiscales, no obstante su autorización correspondía al Poder Ejecutivo, órgano respecto del cual el Tribunal Aduanero carece de competencia para revisar sus actos.

El presente caso. Como bien tiene por probado la mayoría, la acción de la recurrente, lo es una solicitud para que se le reconozca el pago de daños y perjuicios que en forma global estima en doscientos setenta y cinco millones de colones. Fundamenta los mismos en una serie de actuaciones y omisiones del Servicio Nacional de Aduanas, como de los Poderes Ejecutivo y Judicial. Los daños y perjuicios que reclama la recurrente, tienen su origen, según ella, en actuaciones y omisiones lícitas e ilícitas de esos órganos, por lo que la Administración debe responder de su conducta y de la de sus funcionarios.

La legislación aduanera no contempla norma alguna que regule la responsabilidad de la Administración, sino que tal responsabilidad la encontramos regulada en el Título Séptimo de la Ley General de la Administración Pública, respecto de la aplicación de sus regulaciones, no existe conflicto alguno, de manera que la recurrente se sustenta en las mismas a efecto de establecer su reclamo. El conflicto surge con la aplicación en el presente asunto de las normas procedimentales de la Ley General de Aduanas por sobre las de la Ley General de la Administración Pública. Al respecto, recordemos el pronunciamiento de la Procuraduría General de la República transcrito supra, dictamen que claramente señala que la desconcentración operada lo es respecto de la técnica aduanera, por ende la competencia de este Tribunal es en tal materia de manera que en lo que a responsabilidad de la Administración hemos de aplicar las normas tanto de fondo como procedimentales establecidas en la Ley General de la Administración Pública. Así lo reconoce el Tribunal Superior de lo Contencioso Administrativo en reiterada jurisprudencia, actuando precisamente como jerarca impropio.

Otro aspecto por el cual no estoy de acuerdo con la resolución de mayoría, lo es en el tanto estima la misma que existen gestiones de la recurrente para declarar la nulidad de las actuaciones que señala como ilícitas, entrando a conocer de las mismas por ser de previo y especial pronunciamiento. Sobre el punto como he mencionado, la referencia a tales nulidades se dan en virtud de justificar el

reclamo por daños y perjuicios y no como una pretensión de que se declare la nulidad tal y como lo indica el Doctor Ortiz Ortiz en la cita del voto de mayoría. Por otro lado, al conocer y pronunciarse sobre las mismas la mayoría decide únicamente respecto de la caducidad, omitiendo el objeto principal de lo venido en alzada, a saber que se deje sin efecto la resolución del Director General de aduanas que declara sin lugar el reclamo por haber operado la prescripción, de manera que el fallo de mayoría resulta omiso respecto de conocer la pretensión principal y única de la recurrente, y se contradice respecto de la misma cita que hace del Doctor Ortiz. Precisamente para justificar lo resuelto se aclara que lo resuelto refiere a alegada nulidad de los actos y actuaciones de las autoridades aduaneras en el ejercicio de sus competencias, único punto respecto del cual, entre todos los alegados, a criterio de la mayoría resulta el Tribunal competente.

En efecto, el voto de mayoría se declara incompetente para conocer de las pretensiones del recurrente relacionadas con el acuerdo del Poder Ejecutivo número 19 de marzo 15 de 1983 como de los daños y perjuicios en general. Sin ahondar en el tema, la mayoría reconoce la incompetencia del Tribunal para conocer de actos simples o complejos, en materia aduanera en virtud de la incompetencia en razón del sujeto como de la materia de daños y perjuicios. El numeral 205 de la Ley General de Aduanas limita la competencia del Tribunal Aduanero a conocer en alzada de los actos dictados por el **Servicio Nacional de Aduanas**. Dicha posición, sostiene el suscrito, resulta correcta, por lo que de conocer este Tribunal, se extralimita en sus competencias y por ende su actuación resulta nula. Sin embargo, la mayoría se declara competente para conocer de lo que estima como una pretensión del la recurrente, relacionadas con:

- a- el informe emitido por la jefatura del Departamento de Auditoría de la Dirección General de Aduanas número A-17-80,
- b- de la denuncia presentada al Ministerio Público por el asistente legal, licenciado Vargas Chaves
- c- de la resolución RES-DL-262-82,

d- como de la resolución de la resolución del Director General de Aduanas número RES-AL-434-98.

Sobre el punto, debo disentir porque, tanto el informe de auditoria como las resoluciones de cita, constituyen actuaciones preliminares, preparatorias del acuerdo del Poder Ejecutivo número 19 de marzo 15 de 1983. Estimo, resulta contradictorio negarse la competencia respecto del acto final y asumirla en tratándose de actos preparatorios que sustentan el acto final. Es claro que los actos preparatorios solo pueden recurrirse conjuntamente con el final, de manera que la división que hace la mayoría, a mas de contradictoria con lo dispuesto en los numerales 344, 345 de la Ley General de la Administración Pública, resulta contrario a los principios de economía procesal. Además como ya señalara, el Tribunal Aduanero Nacional en razón de la materia, a saber daños y perjuicios en virtud de la responsabilidad de su actuar, resulta incompetente, por lo que en la eventualidad de que se estime admisible separar los actos de las actuaciones, como lo hace la mayoría, resulta improcedente todo pronunciamiento en esta sede. Respecto de la resolución número RES-AL-434-98, única respecto de la cual la recurrente expresamente ha solicitado su nulidad, debe señalarse que conforme lo hace parcialmente la mayoría y totalmente el suscrito, en virtud de la incompetencia del Tribunal Aduanero Nacional, lo procedente es declarar mal admitida la apelación a efecto de que conforme lo considerado se admita la misma respecto del órgano señalado como competente el cual nunca se ha manifestado sobre el punto, no existiendo conflicto formal, quizá por cuanto es la primera vez que el mismo surge ante la reciente creación de éste Tribunal.

Por otro lado, estima el suscrito, el fallo de mayoría, al pronunciarse sobre las nulidades y la caducidad de la acción, puede ser interpretado como una posibilidad de reabrir el plazo a efectos establecer la acción contencioso administrativa respecto de la **prescripción**.

Disiento además por cuanto, el falló omite pronunciamiento respecto de las actuaciones y omisiones a que la recurrente hace referencia respecto a la tramitación de la denuncia por el Poder Judicial. Sobre el punto hay que recordar a la recurrente que, conforme se señalara supra, este Tribunal carece de competencia en razón del sujeto, por lo que sobre tales aspectos debe acudir ante el órgano correspondiente que no es ni el Servicio Nacional de Aduanas ni el Poder Ejecutivo.

En síntesis, es criterio del suscrito que el Tribunal Aduanero Nacional es incompetente para conocer y resolver del presente asunto en razón de la materia como del sujeto. Estimo que, **aunque constituya un retraso mas para el administrado, la actuación de este Tribunal debe obedecer a los principios de legalidad y economía procesal** de manera que las gestiones accesorias, si existen, se tramiten con la principal y no por separado. Que precisamente como jerarca impropio, es su deber velar por la legalidad de las actuaciones de la administración. Considero además que uno de los objetivos del procedimiento, consiste en garantizar la legalidad de las actuaciones, mediante la constante depuración de los vicios, no solo para garantizar la legalidad, sino para garantizar el fin público de las actuaciones en aplicación verdadera del principio de economía procesal. De manera que pronunciarse sobre lo accesorio, lo que a mi criterio no existe, es contrario al principio de economía procesal. Por otro lado recordemos que la administrada tiene abierta la vía contenciosa, desde el momento mismo en que la Dirección General de Aduanas se niega a admitir la apelación y traslada al Ministro para lo que estime pertinente, dejando en suspenso la tramitación de la apelación y por lo cual la Sala constitucional declara con lugar el recurso de amparo mediante voto 4558-98. Actuación que, en conformidad con el numeral 345.3 de la Ley General de la Administración Pública y 19.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, estima el suscrito, abrió dicha vía, careciendo por ende razón los argumentos de la recurrente respecto de que, requiere que se le agote la vía administrativa para acudir a la judicial. Lo anterior sin perjuicio de lo ahora resuelto y que como

señalara anteriormente obedece a que es la primera vez que el tema de la competencia surge, producto de la reciente creación de éste Tribunal.

DICK RAFAEL REYES VARGAS